



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/2001/12
14 de junio de 2001

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos
52º período de sesiones
Tema 4 del programa provisional

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Derechos de propiedad intelectual y derechos humanos

Informe del Secretario General

ÍNDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN	3
I. RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS	3
A. Brasil	3
B. Pakistán	3
II. RESPUESTAS RECIBIDAS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES .	5
A. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo	5
B. Organización Mundial del Comercio	7

ÍNDICE (continuación)

	<u>Página</u>
III. RESPUESTAS RECIBIDAS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	11
A. Centro de Derecho Ambiental Internacional	11
B. European Writers' Congress	12
C. Comisión Justicia y Paz de Alemania	13
D. Greenpeace	15
E. Asociación Internacional de Escritores y Directores de Obras	17
F. Federación Internacional de Músicos	18
G. Unión Internacional de Editores	18
H. Instituto Max Planck	19

INTRODUCCIÓN

En su resolución 2000/7, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos pidió al Secretario General que le presentase un informe sobre la cuestión de los derechos de propiedad intelectual (CDPI) y los derechos humanos en su 53º período de sesiones. A tal fin, se envió (con fecha 6 de marzo de 2001) una nota verbal a los Estados y una carta a distintas organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, en las que se les pedía información que fuese pertinente para la elaboración del informe. Al 29 de mayo de 2001, se habían recibido las respuestas del Brasil, el Pakistán, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Centro de Derecho Ambiental Internacional, el European Writers' Congress, Greenpeace, la Comisión Justicia y Paz de Alemania, la Asociación Internacional de Escritores y Directores de Obras Audiovisuales (AIDAA), la Federación Internacional de Músicos, la Unión Internacional de Editores y el Instituto Max Planck. Las respuestas se recogen en los párrafos siguientes. Habida cuenta de su longitud y de la limitación del número de páginas que deben respetar los informes que se presentan a la Subcomisión, muchas de las respuestas se recogen de manera resumida. Los originales (en inglés, a menos que se indique lo contrario) pueden consultarse en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

I. RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS

A. Brasil

Las observaciones formuladas por el Gobierno del Brasil se recogen en el informe de la Alta Comisionada sobre las consecuencias para los derechos humanos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que la Subcomisión tiene a su disposición con la signatura E/CN.4/Sub.2/2001/13. El informe de la Alta Comisionada versa específicamente sobre el derecho a la salud. Las observaciones del Brasil se incluyeron en dicho informe, y no en el presente, toda vez que giraban exclusivamente en torno a la promoción y protección del derecho a la salud.

B. Pakistán

1. El Gobierno del Pakistán respondió que en los últimos años el régimen internacional de propiedad intelectual había sido reforzado considerablemente, sobre todo con la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC.
2. Los objetivos declarados al reforzar el régimen de los derechos de propiedad intelectual fueron propiciar una mejora de la innovación, la inversión extranjera, la investigación y el desarrollo y, sin duda, la transferencia de tecnología. Como establece el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC: "La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones".

3. La experiencia de muchos países en desarrollo en la aplicación de los acuerdos de propiedad intelectual indica que no se están logrando los objetivos fundamentales de esos acuerdos. Tal vez haya motivos para pensar, al menos teóricamente, que sus ventajas se harán sentir con mayor intensidad a largo plazo en la forma de un aumento de la inversión, la innovación y la transferencia de tecnología. Sin embargo, hay que rendirse a la evidencia de que a corto y medio plazo los costos que soportarán los países en desarrollo serán superiores a las ganancias y que el equilibrio entre el titular de los derechos (en la mayoría de los casos procedente de los países desarrollados) y el usuario de la propiedad intelectual se ha visto alterado drásticamente en favor del primero. Así lo corroboran los hechos siguientes:

- a) Al aplicar los acuerdos de propiedad intelectual los países en desarrollo tienen que incurrir en unos costos inmediatos bastante onerosos. Entre ellos cabe destacar los ocasionados por la creación de los marcos judicial, administrativo y coercitivo, incluida la creación de mecanismos de control aduanero y fronterizo;
- b) La aplicación de unas leyes de propiedad intelectual más estrictas ha propiciado un constante aumento de los precios de los productos farmacéuticos, los programas informáticos y los libros de texto. Estos productos son fundamentales para promover los derechos a la salud, la educación y la alimentación;
- c) Cada vez hay más restricciones a la adquisición de tecnología. Los titulares de las patentes pueden exigir precios más elevados por la transferencia de productos e imponer unas condiciones más gravosas para el disfrute de la licencia. Asimismo, con el aumento de la amplitud y el alcance de las patentes a menudo disminuyen las actividades de investigación en los ámbitos cubiertos por las patentes, sobre todo en el ámbito de las tecnologías más recientes como la biotecnología;
- d) Se observa una falta de protección de los conocimientos tradicionales en ámbitos donde los países en desarrollo cuentan con importantes bazas. Es preocupante el aumento del número de patentes de variedades vegetales o de productos elaborados a partir de recursos genéticos que pueden encontrarse en los países en desarrollo que no pagan ni derechos ni regalías a las comunidades locales, cuyos conocimientos se aprovechan en la fase de investigación;
- e) Fortalecer los derechos de propiedad intelectual conduce a menudo a que su titular observe un comportamiento monopolístico y restrictivo de la competencia que, como es lógico, tiene efectos negativos en los precios de los productos y el acceso a la tecnología;
- f) La imposición de normas más estrictas para poder acogerse a las restricciones que permiten recurrir a importaciones paralelas recorta el margen de maniobra de los países en desarrollo para reaccionar y promover los auténticos intereses nacionales, en particular en los ámbitos de la educación y la salud, como demostró patentemente hace poco la incapacidad de algunos países para reaccionar con prontitud a la situación de emergencia ocasionada por la epidemia del VIH/SIDA.

4. A este respecto, es necesario emprender un examen exhaustivo del régimen internacional de propiedad intelectual con objeto de:

- a) Restablecer el equilibrio entre los derechos de los titulares de la propiedad intelectual y los de los usuarios;
- b) Velar por que los objetivos fundamentales del acuerdo de propiedad intelectual, a saber, la promoción de la innovación y la difusión de la tecnología y la inversión, resulten favorecidos y no obstaculizados por el régimen de propiedad intelectual;
- c) Revisar el acuerdo de propiedad intelectual a fin de incluir disposiciones que contribuyan al desarrollo de los países en desarrollo;
- d) Velar por que la aplicación del acuerdo de propiedad intelectual no entre en conflicto con las disposiciones correspondientes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

II. RESPUESTAS RECIBIDAS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

A. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

1. En la respuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se hacía referencia a tres aspectos de la labor de la organización relacionados con la protección de la propiedad intelectual: un estudio acerca del Acuerdo sobre los ADPIC y sus efectos en el desarrollo, el derecho y la política de la competencia, y los conocimientos tradicionales.

2. En 1996, la secretaría de la UNCTAD preparó un informe titulado: "The ADPIC Agreement and Developing Countries" (UNCTAD/ITE/1). En el informe se señalaba que el Acuerdo sobre los ADPIC representaba un cambio importante de las normas internacionales relativas a la protección de la propiedad intelectual. Es probable que su aplicación opere cambios fundamentales en la estructura industrial, la competencia comercial y el crecimiento en muchos países.

3. La principal conclusión del estudio era que los países en desarrollo debían ser conscientes de las consecuencias económicas y de otra índole originadas por el Acuerdo para poder configurar sus regímenes de propiedad intelectual, incluida la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, de manera que se fomentase una competencia dinámica y que fuera compatible con sus objetivos de desarrollo. En última instancia, pues, el objetivo del estudio era facilitar una mejor comprensión del Acuerdo por parte de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y apoyar las iniciativas de esos países en la formulación de estrategias y el establecimiento de mecanismos que propiciasen su aplicación.

4. El informe plantea tres cuestiones principales. En primer lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC requiere que la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) sea reforzada en muchos países, de manera escalonada, en varias etapas. Se prevé que el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual tenga efectos positivos en los países en desarrollo, en particular, más innovación local y nuevos flujos de inversión extranjera directa y

transferencia de tecnología. Sin embargo, también puede ocasionar determinados efectos negativos, como un aumento de los precios de la tecnología y los productos protegidos y unas menores posibilidades para lograr la difusión mediante la imitación o la copia de los productos. En segundo lugar, al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, los países en desarrollo deberían aspirar a un equilibrio duradero entre, por una parte, las necesidades de protección de las empresas innovadoras y sus licenciarios y la facilidad de apropiación de su propiedad intelectual y, por otra, las necesidades de los consumidores y competidores posteriores legítimos. Así, al compaginar sus objetivos de desarrollo económico con los requisitos del Acuerdo, los países en desarrollo deberían preservar el debido equilibrio entre los incentivos a la innovación y la necesidad de una adecuada difusión de conocimientos técnicos en sus economías. En tercer lugar, las repercusiones de los diversos ámbitos de los derechos de propiedad intelectual regulados en el Acuerdo serán diferentes en cada país en función, entre otras cosas, del régimen de propiedad intelectual vigente, el grado de desarrollo económico y tecnológico y la modalidad de aplicación.

5. A finales del decenio de 1980 y principios del de 1990, varios países en desarrollo, principalmente de Asia y de América Latina, iniciaron la reforma de sus regímenes jurídicos de propiedad intelectual y las instituciones correspondientes. Por consiguiente, en algunos países el Acuerdo sobre los ADPIC supondrá asumir un número reducido de obligaciones nuevas, toda vez que ya han iniciado reformas en consonancia con el Acuerdo. En el caso de otros, el Acuerdo obligará a introducir importantes cambios en las normas de protección. En la práctica, el planteamiento que adopte un país determinado para velar por la observancia de las normas del Acuerdo dependerá de sus propias estrategia de innovación y política de desarrollo tecnológico. Por ello, sigue habiendo un margen para aplicar el Acuerdo de una manera que permita promover una competencia dinámica en las economías de esos países, habida cuenta de unos incentivos legales idóneos para la difusión de la información y la innovación local. Este tipo de planteamiento exigirá:

- a) Establecer una normativa legal sobre el derecho de propiedad intelectual que esté en consonancia con el Acuerdo sobre los ADPIC, pero que no acarree desventajas importantes para los inventores y creadores posteriores;
- b) Instaurar estructuras de incentivos que contribuyan a fomentar la innovación en el ámbito local;
- c) Sacar un mayor partido del acceso a la información científica y técnica que puede obtenerse en la infraestructura mundial de tecnologías de la información;
- d) Aplicar de manera coherente políticas de la competencia para reducir los efectos adversos del uso abusivo de los derechos de propiedad intelectual; y
- e) Mejorar el sistema de innovación mediante programas más amplios de adquisición de competencias intelectuales y la mejora de capacidad para asimilar nuevas informaciones técnicas.

6. En la comunicación de la UNCTAD también se hace referencia a su labor en el ámbito del derecho y la política de la competencia, que se inició a principios del decenio de 1970 y culminó en 1980 con la aprobación por la Asamblea General (resolución 35/63) del Conjunto de

principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas, en forma de recomendación a los Estados (el Conjunto).

7. La secretaría de la UNCTAD preparó un informe sobre la política de competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (TD/RBP/CONF.5/6) como parte de la documentación que se examinaría en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar todos los aspectos del Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas que se celebró en septiembre de 2000. La Conferencia aprobó una resolución exhaustiva en la que se reafirmaba la validez del Conjunto, se pedía a los Estados que lo aplicasen y se definía la labor futura de la UNCTAD en este campo.

8. Por último, la comunicación de la UNCTAD se refería a los conocimientos tradicionales. En la X UNCTAD, los Estados miembros decidieron hacer frente al problema de la protección de los conocimientos tradicionales como parte de los trabajos de la UNCTAD en la esfera del comercio, el medio ambiente y el desarrollo. En cumplimiento de este mandato, la UNCTAD organizó en octubre de 2000 una Reunión de Expertos en sistemas y experiencias nacionales de protección de conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. Entre los resultados de la reunión figuraba una serie de recomendaciones.

9. En febrero y marzo de 2001, la Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos de la UNCTAD examinó las recomendaciones de la Reunión. La Comisión aprobó unas recomendaciones convenidas a los gobiernos, la comunidad internacional y la UNCTAD. La Comisión alentaba a los gobiernos a que, en colaboración con las comunidades indígenas y locales, promoviesen un mayor conocimiento de la función y el valor de los conocimientos tradicionales (CT), apoyasen el potencial innovador de las comunidades indígenas y locales, y promoviesen, cuando procediera, la comercialización de productos y servicios basados en esos conocimientos, haciendo hincapié en una distribución equitativa de los beneficios con los poseedores de conocimientos tradicionales, y aplicasen la legislación nacional para la protección de tales conocimientos. En el plano internacional, la Comisión reconocía que la cuestión de la protección de los conocimientos tradicionales tenía muchas facetas y que en esos momentos era un tema de debate en varios foros, en particular las reuniones relacionadas con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio. La Comisión subrayaba la necesidad de que se mantuviese la coordinación y la cooperación entre comunidades, se llevasen a cabo nuevos intercambios de información sobre los regímenes nacionales de protección de los conocimientos tradicionales y se examinase la posibilidad de adoptar unas normas mínimas de un sistema sui generis de protección de los conocimientos tradicionales reconocido internacionalmente. La Comisión también hizo recomendaciones concretas a la UNCTAD, en particular que apoyase la labor llevada a cabo conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

B. Organización Mundial del Comercio

1. En la respuesta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se examinan los derechos humanos de los particulares y el interés público como fundamentos tradicionales de la protección de la propiedad intelectual, así como la forma en que se reflejan en la vigente

normativa multilateral sobre la propiedad intelectual, en particular en el Acuerdo sobre los ADPIC.

2. Los derechos humanos y el trato equitativo, de autores e inventores, por una parte, y el interés público, por otra, siguen siendo los pilares sobre los que se asientan los regímenes de propiedad intelectual. Aunque en los regímenes jurídicos de inspiración romanista a veces se hace más hincapié en el primer aspecto y en los sistemas de derecho anglosajón (*common law*) en el segundo, estas dos bases teóricas parecen ser más bien complementarias que recíprocamente excluyentes. Asimismo, conviene señalar que los objetivos sociales son diferentes según las distintas esferas de propiedad intelectual: mientras que las leyes modernas sobre patentes y el derecho de autor han sido concebidas para alentar la creatividad y la innovación tecnológica, y para facilitar medios para financiar las actividades de investigación y desarrollo, el objetivo a que tienden principalmente las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio es más la protección del consumidor y la garantía de una competencia equitativa entre comerciantes.

3. La importancia económica de la propiedad intelectual ha aumentado en los últimos decenios con el creciente papel que desempeñan las industrias del conocimiento y de la información. La interdependencia cada vez mayor de las economías nacionales puso de manifiesto que había dejado de existir un régimen jurídico multilateral aplicable en este campo para regular las relaciones y las diferencias entre los países. Esta circunstancia propició la inclusión de las cuestiones de propiedad intelectual en las negociaciones de la Ronda Uruguay, iniciadas en 1986, y la celebración del Acuerdo sobre los ADPIC como parte del conjunto de acuerdos que constituyen el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio.

4. Los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, enunciados en el artículo 7, hacen hincapié en el interés público como fundamento de la protección de la propiedad intelectual. Este artículo, titulado "Objetivos", dispone: "La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones". Esto concuerda con los objetivos enunciados en los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Cabe sostener que el Acuerdo sobre los ADPIC también persigue dar efectividad en el plano multilateral al apartado c) del párrafo 1 del artículo 15, que establece el derecho de toda persona a "la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".

5. Cabría añadir que el Acuerdo sobre los ADPIC también promueve otros valores que se consideran fundamentales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Así, por ejemplo, el Acuerdo prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad en materia de derechos de propiedad intelectual; esta disposición supone un respaldo a los principios de no discriminación que se enuncian en los instrumentos de derechos humanos. El Acuerdo promueve el imperio de la ley en el plano nacional. Exige, entre otras cosas, la observancia del debido procedimiento legal al exigir que las actuaciones judiciales sean justas y equitativas, que las decisiones se formulen por escrito y sean motivadas y que las partes tengan la posibilidad de recurrir.

El Acuerdo prevé la cooperación internacional para combatir la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio, infracciones a menudo vinculadas a la delincuencia organizada. El Acuerdo también promueve el imperio de la ley en el ámbito multilateral mediante más normas establecidas de común acuerdo y un sistema multilateral de solución pacífica de las diferencias.

6. Uno de los objetivos de la protección de la propiedad intelectual es promover el interés público a largo plazo mediante el reconocimiento de derechos exclusivos a los titulares de un derecho durante un período limitado de tiempo. A la expiración de ese período de protección, las obras e invenciones protegidas vuelven a ser de dominio público y cualquiera puede hacer libre uso de ellas sin la autorización previa del titular del derecho. De ahí que, a la larga, no haya contradicción, sino más bien complementariedad, entre los intereses de promover la creatividad y la innovación y de maximizar el acceso. Sin embargo, durante el período de protección podrían surgir situaciones en que ambos aspectos, que pueden reflejar también las diferencias entre los intereses de los titulares del derecho y los de los usuarios, entren en conflicto. La dificultad para el legislador nacional e internacional estriba en encontrar el equilibrio óptimo entre diversos intereses contrapuestos con miras a maximizar el bien público y al tiempo garantizar los derechos humanos de autores e inventores. En el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC se destaca la necesidad de encontrar este equilibrio.

7. Se puede conseguir un equilibrio óptimo en los regímenes de propiedad intelectual en los planos nacional y multilateral mediante una definición adecuada de la materia objeto de la protección, el alcance de los derechos, las limitaciones permisibles y la duración de la protección. Se trata de un equilibrio en constante evolución en los planos tanto nacional como internacional como reacción a las novedades tecnológicas y la evolución económica y política. El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de derechos mínimos que otorga un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para aplicar sus disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos y ajustar aún más este equilibrio para tener en cuenta determinados aspectos de su orden público interno.

8. La mejor manera de velar por la observancia de los derechos enunciados en el párrafo 2 del artículo 27 de la Declaración Universal y en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de otros derechos humanos es, habida cuenta de su carácter interdependiente, mediante el logro de un equilibrio óptimo en el marco del régimen de propiedad intelectual y mediante la adopción por los poderes públicos de otras medidas afines. Se pueden utilizar los derechos humanos, como así se ha venido haciendo, para abogar en favor de equilibrar el sistema bien al alza o a la baja ajustando los actuales derechos o creando otros nuevos. Determinar cuál es la mejor manera de favorecer los objetivos de los derechos humanos es, a la postre, una cuestión de análisis social y económico y de indicios empíricos.

9. La protección mediante patente de los productos farmacéuticos es una cuestión en la que la dificultad de encontrar un equilibrio adecuado se hace sentir de manera particularmente aguda. Por una parte, es muy importante desde un punto de vista social y de salud pública que se produzcan nuevos fármacos y vacunas para tratar y prevenir las enfermedades y, a este respecto, revisten una importancia singular los incentivos que ofrece el sistema de patentes. Por otra parte, debido precisamente al valor social de los fármacos así producidos, la presión ejercida para que tales fármacos sean fácilmente asequibles lo antes posible es muy grande.

10. El Acuerdo sobre los ADPIC representa un esfuerzo para lograr un equilibrio adecuado entre estos aspectos. Por una parte, el Acuerdo exige que, al finalizar el correspondiente período transitorio, la protección de los productos farmacéuticos conferida mediante patente tenga una duración de 20 años. Por otra, el Acuerdo contiene numerosas disposiciones que permiten a los gobiernos aplicar sus regímenes de propiedad intelectual de tal manera que les permita tener en cuenta una serie de consideraciones inmediatas y a largo plazo relativas a la salud pública. Entre estas disposiciones figuran las relativas a determinadas exenciones de patentabilidad, la posibilidad de hacer un número limitado de excepciones a los derechos exclusivos, la concesión obligatoria de licencias, las importaciones paralelas y el reconocimiento de que los Estados miembros pueden adoptar medidas para proteger la salud pública y la nutrición.

11. La comunidad internacional, y en particular el Consejo de los ADPIC, debate en la actualidad la cuestión de la protección de los conocimientos tradicionales. Una de las inquietudes expresadas es la posibilidad de que los extranjeros puedan patentar conocimientos tradicionales. Con arreglo a los principios enunciados en el Acuerdo sobre los ADPIC, no cabe esta posibilidad. A tenor del Acuerdo, sólo son patentables las invenciones que cumplan los criterios de novedad y actividad inventiva, esto es, que no forman parte de lo que los funcionarios de patentes denominan el "estado de la técnica". Los conocimientos tradicionales generalmente no se ajustarían a esos criterios. Ha habido casos en los que se han concedido indebidamente patentes por conocimientos que han resultado no ser nuevos. En tales casos, las patentes pueden ser invalidadas, como así se ha hecho.

12. Una de las causas de esa concesión irregular de patentes es la circunstancia de que en la práctica gran parte de los conocimientos tradicionales no figura en las bases de datos que consultan los examinadores de patentes cuando deciden conceder o no una patente. Otra inquietud planteada, especialmente en relación con los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, es que el régimen de propiedad intelectual no brinde a las comunidades las suficientes oportunidades para evitar que sean utilizados por otras personas. A este respecto, por supuesto, el vigente régimen de propiedad intelectual puede ser útil, hasta cierto punto, en sus distintos campos, en particular de los derechos de autor y artistas intérpretes o ejecutantes, las marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de certificación, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes y los secretos de fabricación. Se ha entablado un debate sobre la conveniencia o no de completar el vigente régimen de propiedad intelectual con formas de protección orientadas de manera más específica a los conocimientos tradicionales, especialmente los de las comunidades indígenas y locales.

13. Un tema conexo es el de la propiedad intelectual y la biodiversidad, en particular la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a esta materia. En el Acuerdo sobre los ADPIC, que versa sobre la propiedad intelectual, nada se dice sobre las cuestiones a que se refiere en el Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a la facultad de los países de regular el acceso a los recursos biológicos de sus territorios con arreglo al principio del consentimiento fundamentado previo y los mecanismos de participación en los beneficios. Este silencio significa que el Acuerdo sobre los ADPIC deja a la discreción de los gobiernos la adopción de cualquier medida legislativa de conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica acerca de estas cuestiones.

III. RESPUESTAS RECIBIDAS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

A. Centro de Derecho Ambiental Internacional

1. El Centro de Derecho Ambiental Internacional viene prestando atención a los derechos de propiedad intelectual desde hace varios años. Preocupa al Centro que el vigente régimen internacional de los derechos de propiedad intelectual pueda afectar a la seguridad alimentaria, la salud, el desarrollo y la conservación de la diversidad biológica, debilitando así ciertos derechos humanos fundamentales.

2. El Centro de Derecho Ambiental Internacional señala en su respuesta que, a medida que se avanza en la vía hacia una "economía del conocimiento," la definición de la propiedad y el control de la información se convierte en una de las más importantes cuestiones políticas a que tiene que hacer frente la sociedad. La principal justificación de la concesión de unos derechos de propiedad limitados en forma de derechos de propiedad intelectual (DPI) es que son beneficiosos para la sociedad al promover la innovación, la creación y la protección del consumidor. Los sistemas de propiedad intelectual, por consiguiente, han tratado tradicionalmente de guardar un delicado equilibrio entre el reconocimiento de derechos de propiedad privada para recompensar la innovación favoreciendo el acceso al producto y la promoción del interés público. Sin embargo, el equilibrio entre interés privado e interés público es cada vez más difícil de mantener. A medida que la propiedad del conocimiento se convierte en un elemento determinante para distinguir entre los "privilegiados" y los "desposeídos" en la sociedad moderna, poderosos grupos de interés han intensificado su presión sobre los gobiernos para lograr una mayor protección y observancia internacionales de los DPI. Algunos grupos, en determinados sectores industriales, han intentado que se confiera -injustificadamente- mayor fuerza a los DPI promoviéndolos como derechos naturales sin límite; en otras palabras, como derechos que tienen una fuerza moral que hasta cierto punto está más allá de cualquier cuestionamiento político. Los argumentos aducidos en apoyo de esa posición parten del supuesto de que un derecho otorgado sobre tecnología en un Estado es en cierto modo equiparable a un derecho de aplicación universal. Ahora bien, esto supone negar la naturaleza contingente de los DPI; los gobiernos, en interés de sus ciudadanos, pueden optar por no conceder DPI o por definirlos más estrictamente. Ello es contrario también a una premisa básica de los sistemas de propiedad intelectual, esto es: que toda ampliación de la protección de los DPI esté claramente justificada por las correspondientes ventajas para el bienestar público.

3. Esta desviación del equilibrio entre interés público e interés privado adquiere una nueva dimensión cuando se considera en el contexto internacional. Los países desarrollados, en los que tradicionalmente tienen su establecimiento los propietarios de tecnología, han tendido a promover los DPI como algo ventajoso para el desarrollo. A veces, los países en desarrollo, que generalmente son usuarios y no productores de tecnología, han criticado en cambio los DPI aduciendo que aumentan los precios y restringen el acceso a las nuevas tecnologías necesarias para el desarrollo humano sostenible. Pese a las acerbadas disputas entre países desarrollados y países en desarrollo durante la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, se introdujeron en el temario de cuestiones de comercio internacional unos estándares mínimos para la protección y el ejercicio efectivo de los DPI que se plasmaron en el Acuerdo sobre los ADPIC.

4. La desviación en favor de los países y las empresas productores de DPI se ha acentuado como resultado directo del Acuerdo sobre los ADPIC. Los miembros de la OMC están obligados ahora a introducir normas sobre propiedad intelectual que, en muchos casos, amplían el alcance de la protección de los DPI al eliminar, por ejemplo, las excepciones relativas a categorías de productos como los productos farmacéuticos; alargan la duración de la protección; y extienden el ámbito geográfico de aplicación de los DPI. Los miembros han acordado aplicar sistemas de propiedad intelectual que son costosos y están orientados al desarrollo industrial, pero no protegen a los innovadores que son ricos en conocimientos aunque económicamente pobres. También se ha expresado preocupación por el hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC encaja con dificultad con los demás acuerdos de la OMC; mientras que los acuerdos sobre bienes y servicios tratan de lograr la liberalización del comercio, el Acuerdo sobre los ADPIC fomenta la intervención en el mercado para proteger derechos de propiedad privada.

5. El Centro de Derecho Ambiental Internacional estima que, aunque la protección de la propiedad intelectual puede tener efectos positivos, la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC podría redundar en perjuicio, en particular, de la innovación en los países en desarrollo, de la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, de la transferencia de tecnología en virtud de acuerdos ambientales multilaterales, de la asistencia sanitaria y el acceso a los medicamentos esenciales, de la protección de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales y de la aplicación de determinados aspectos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

6. Como primera medida para resolver las complejas cuestiones que plantea el Acuerdo sobre los ADPIC, el Centro de Derecho Ambiental Internacional recomienda: i) que los miembros de la OMC entablen un debate público y completo, en colaboración con las organizaciones internacionales competentes y la sociedad civil, sobre las cuestiones de interés público que plantea la evolución del régimen internacional de propiedad intelectual; y ii) que los miembros de la OMC inicien en el Consejo de los ADPIC un "examen de sostenibilidad" de carácter sistemático de las consecuencias de la aplicación del Acuerdo para el interés público y el desarrollo sostenible, como parte del examen prescrito en el Acuerdo sobre los ADPIC.

B. European Writers' Congress

1. El European Writers' Congress acoge con satisfacción que la Subcomisión haya afirmado que el derecho a la protección de los intereses morales y materiales de los autores es un derecho humano. Estima que: i) en general, debe guardarse un equilibrio entre los intereses de los autores individuales y los de la sociedad en general; ii) la protección de la creatividad individual de los autores debería ser igual para todos, sea cual fuere su raza, religión o antecedentes culturales, sociales o económicos; iii) los derechos a las producciones creativas de las comunidades indígenas deberían ser respetados; iv) los derechos de propiedad intelectual abarcan una amplia variedad de producciones, algunas de las cuales, de naturaleza artística, son el resultado de la propia creación intelectual del autor, mientras que otras lo son de una inversión de competencia profesional, conocimientos o recursos en producciones industriales o comerciales y, por consiguiente, los intereses respectivos en esos derechos no son los mismos en todos los casos; v) el equilibrio entre los intereses de los distintos autores de creación y los intereses de la sociedad en general debería estimarse separadamente del equilibrio entre los intereses de los propietarios de otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes o los derechos sobre producciones biológicas; vi) las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC

relativas a la protección de los DPI deberían ser objeto de un análisis y pronunciamiento separados al evaluar el equilibrio entre los intereses de los propietarios de esos derechos y los intereses del público.

2. El European Writers' Congress insta al Secretario General: i) a que señale que la existencia de todo el material cultural compuesto por obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas depende de la creación de autores individuales y que la protección y el amparo de los derechos de los autores, hasta donde sea posible, son, por consiguiente, de la más alta prioridad para la salvaguarda y el desarrollo del patrimonio cultural de la humanidad; ii) a que indique que el European Writers' Congress estima que, para servir a la humanidad, los autores deberían contribuir a todos los medios que permitan la más amplia disponibilidad y difusión pública de su obra, pero que las excepciones a este respecto deberían ser evaluadas separadamente de las que se aplican en relación con otros DPI y estar limitadas a determinados casos especiales en los que no son incompatibles con la explotación normal de las obras de los autores ni menoscaban excesivamente los intereses legítimos de éstos.

C. Comisión Justicia y Paz de Alemania

1. La Comisión Justicia y Paz de Alemania está analizando las repercusiones negativas del Acuerdo sobre los ADPIC en los derechos humanos a una alimentación adecuada, la salud y el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos y riquezas naturales y a no ser privados de sus propios medios de subsistencia. En la respuesta se señala que es difícil predecir con exactitud todo el alcance de los efectos que se derivarán de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, los riesgos inminentes ya son obvios. Además, algunos países en desarrollo están sufriendo actualmente presiones políticas en relación con la aplicación de disposiciones que van más allá que el Acuerdo sobre los ADPIC.

2. Con respecto al derecho a una alimentación adecuada, la Comisión Justicia y Paz de Alemania señala que, según la Observación general Nº 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a una alimentación adecuada requiere que los Estados adopten medidas para "velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada". La Comisión estima que las disposiciones relativas a las obtenciones vegetales del Acuerdo sobre los ADPIC originarán importantes cambios en el mercado de las semillas. El sistema de explotación agrícola de la población rural pobre de los países en desarrollo se basa en gran medida en el principio de subsistencia. Esas personas dependen del acceso a los medios de producción y las semillas. Durante siglos han venido cultivando sus semillas e intercambiándolas entre sus comunidades. Esto constituye la base de un cultivo selectivo de propiedades positivas. Las obtenciones vegetales locales se han adaptado a las condiciones locales. Son muy resistentes a las enfermedades de las plantas y a las condiciones climáticas. Incluso en condiciones difíciles, al menos un rendimiento mínimo está garantizado. Tradicionalmente, los agricultores tienen derecho a guardar una parte de las semillas de su propia cosecha, a conservarlas, mejorarlas, utilizarlas, compartirlas, intercambiarlas y venderlas: es lo que se conoce con el nombre de derecho de los agricultores. Mientras se aplica el Acuerdo sobre los ADPIC, las compañías productoras de semillas suministran gratuitamente a los agricultores semillas que están protegidas por patentes y adquieren las compañías productoras de semillas locales. Es lo que ocurre en la India. Las consecuencias son previsibles. En algunos años, los agricultores de las zonas rurales dependerán de las semillas patentadas porque pronto no tendrán sus propias semillas y las

semillas locales ya no estarán disponibles. Además, existe el riesgo de que disminuya el número de obtenciones vegetales como consecuencia de la concentración del mercado. La variedad de la base nutricional quedará irreversiblemente limitada. Es evidente que el previsible aumento del precio de las semillas restringirá gravemente el derecho a una alimentación adecuada de esos agricultores que ya viven actualmente a nivel de subsistencia.

3. La Comisión Justicia y Paz de Alemania estima también que la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC tendrá efectos negativos en el derecho a la salud. La Comisión señala que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a todos los miembros de la OMC a ofrecer patentes de 20 años de duración en todas las esferas de la tecnología, incluidos los productos farmacéuticos. Cada vez más, los países en desarrollo se ven obligados a pagar derechos por el uso de productos farmacéuticos que se han elaborado a partir de sus recursos biológicos. Los partidarios del Acuerdo sobre los ADPIC aducen que sólo un régimen sólido de protección mediante patentes puede motivar a la industria farmacéutica a hacer las importantes inversiones necesarias para la elaboración de nuevos medicamentos. Al mismo tiempo, es evidente que las empresas mercantiles no invierten en proyectos de investigación innovadores y costosos centrados fundamentalmente en las necesidades de los sectores menos favorecidos, porque el poder de compra de esas personas es muy bajo. La protección mediante patentes en la esfera de los productos farmacéuticos no favorecerá la producción de medicamentos encaminada principalmente a satisfacer la necesidad de los sectores menos favorecidos. Sin embargo, la producción económica de medicamentos y la extensión de la investigación pública redundaría en beneficio de dichos sectores. En casos de emergencia, el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza la utilización de la materia de una patente sin el consentimiento del titular del derecho. Pero el ejemplo reciente de las presiones contra la normativa legal sudafricana relativa a los tratamientos del VIH/SIDA pone de manifiesto que es necesario urgentemente aclarar este extremo. La Comisión señala también que los productos farmacéuticos de primera necesidad resultarán más caros cuando sean objeto de la protección de una patente. En consecuencia, se restringirá el disfrute del derecho a la salud.

4. Por último, la Comisión señala que el Acuerdo sobre los ADPIC podría menoscabar el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. La Comisión señala el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone: "... las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. ... las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país". Esas obligaciones se deben examinar en relación con los principios básicos de la OMC relativos al trato nacional (nacionales y extranjeros deben gozar del mismo trato) y el trato de la nación más favorecida (cualquier concesión otorgada por un miembro a los nacionales de cualquier otro país será otorgada a los nacionales de todos los demás miembros). Esto significa que cada país está obligado a autorizar la concesión a extranjeros de patentes sobre sus propios recursos biológicos. Así, por ejemplo, en algunos casos los países de origen de recursos genéticos están obligados a conceder una protección mediante patente aun cuando una sociedad extranjera se haya apropiado ilegalmente de los recursos en que basan la obtención de productos o procedimientos. Esos requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC no sólo son contrarios a los derechos humanos, sino también a las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y al Compromiso Internacional de la FAO.

5. Según la Comisión, las disposiciones del Convenio y del Compromiso Internacional de la FAO están en conformidad con el derecho humano de todos los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Por consiguiente, deberían incorporarse al Acuerdo sobre los ADPIC. A tenor de esas disposiciones se exige el consentimiento fundamentado previo para la utilización de recursos genéticos de un país. La sociedad mercantil que solicite una patente debe aportar pruebas del consentimiento fundamentado previo del país de origen así como de un reparto justo y equitativo de los beneficios con ese país o la comunidad o los particulares de que se trate. No se debe legitimar la apropiación ilícita de los recursos genéticos por personas físicas o jurídicas extranjeras.

D. Greenpeace

1. La respuesta de Greenpeace incluía una serie de comentarios sobre "A patent on breeding human beings", "Patents on Life granted by the European Patent Office" y "Zoo Animals, Racehorses and People: Patents on life - a documentation of applications submitted to the European Patent Office 1999-2000". El objeto principal de la respuesta de Greenpeace es la directiva sobre patentes de la Unión Europea, que está siendo incorporada a los ordenamientos jurídicos internos de Europa. Según Greenpeace la directiva sobre patentes de la Unión Europea legalizaría explícitamente la controvertida práctica de la Oficina Europea de Patentes de conceder "patentes sobre la vida". En particular, aunque normalmente sólo se pueden conceder patentes por invenciones, y no por descubrimientos, la Directiva autorizará la concesión de patentes por genes humanos aislados, que sólo constituyen en realidad un descubrimiento. Esto significa que las partes del cuerpo humano, incluidos órganos completos, los mamíferos y gran parte de los seres vivos serán declarados propiedad intelectual de los titulares de las patentes. La reivindicación de derechos amplios de propiedad intelectual sobre partes de los seres vivos se está convirtiendo en un elemento de la estrategia de privatización de lo que antes era patrimonio común.

2. Según Greenpeace, el sector empresarial y la Oficina Europea de Patentes elaboraron la Directiva de la Unión Europea. Además, las empresas de ingeniería genética ejercieron una enorme influencia en el debate del Parlamento Europeo. Con objeto de demostrar hasta qué punto las empresas del sector solicitan patentes sobre la vida, Greenpeace, con el apoyo de la organización No Patents on Life, investigó durante dos años en la Oficina Europea de Patentes. Más de 1.000 solicitudes de patentes correspondientes a los años 1999 y 2000 fueron estudiadas en detalle y clasificadas por categoría. La investigación produjo varios resultados.

- a) Se ha producido un aumento notable del número de solicitudes de patentes relativas concretamente a los seres humanos. Algunas de esas solicitudes de patentes demuestran con más claridad que cualquier otra publicación la medida en que el sector empresarial proyecta utilizar a los seres humanos como una nueva fuente de materias primas comercialmente explotables;
- b) El número de solicitudes de patentes por genes ha aumentado de manera espectacular y en algunos casos se reivindican al mismo tiempo patentes sobre secuencias de varios centenares de genes humanos.

- c) Se da una ampliación sistemática de las patentes solicitadas en el campo de la producción de alimentos. En la actualidad, las solicitudes de patentes no versan sólo sobre las semillas de trigo sino también sobre la harina panificable.
- d) Entre los hechos más recientes figuran las solicitudes de patentes por productos alimenticios modificados genéticamente.

3. Greenpeace incluye los siguientes ejemplos de solicitudes de patentes sobre la vida (el número de la solicitud figura entre paréntesis): la obtención genética de embriones humanos (WO 00/27995); un proceso de clonación de células germinales femeninas de animales de parques zoológicos, caballos de carreras y personas antes de su fecundación (WO 00/01806); la fecundación artificial combinada con la determinación del sexo (WO 99/33956); un procedimiento de ensayo de semillas modificadas no genéticamente y los alimentos producidos a partir de ellas (WO 00/48454); el arroz de oro, granos de arroz con un contenido mejorado de provitamina A (WO 00/53768); harina panificable (WO 00/29591); la reivindicación de derechos sobre plantas, semillas y cultivos con posibles ingredientes beneficiosos para la salud y el material genético correspondiente, que incluiría la elaboración de productos alimenticios y productos elaborados como salsas, ketchup y sopas (WO 00/04175); más de 100 secuencias genéticas del tejido ovario humano (WO 9/51727); la reivindicación de la protección mediante patentes de más de 1.000 secuencias genéticas de un patógeno que causa meningitis (WO 99/22430).

4. Según Greenpeace, después de la protección mediante patente de plantas, células y órganos, ahora se ha patentado también la intervención en el genoma de la especie humana. Esto viola un tabú y menoscaba la dignidad humana hasta un extremo inaudito.

5. Greenpeace pide lo siguiente:

- a) Que no se concedan patentes por los genes, células, tejidos y órganos humanos o por el cuerpo humano en su totalidad; las partes del cuerpo humano no deben ser degradadas a productos comerciales; no debe haber ningún derecho a reivindicar la propiedad del cuerpo humano;
- b) La vida -incluidos los animales y las plantas- no son una invención de la industria genética, y por ende no pueden, por principio, ser objeto de patente; no se debe permitir que las empresas de la industria genética reivindiquen derechos de propiedad sobre nuestra diversidad biológica y patrimonio natural común;
- c) La manipulación del ser humano y de animales no debe convertirse en un negocio;
- d) Los Estados Partes en el Convenio Europeo de Patentes deben ejercer un control político e impedir que la Oficina Europea de Patentes conceda nuevas patentes en esta esfera;
- e) La Directiva de la Unión Europea sobre la protección mediante patentes de las invenciones biotecnológicas no debería incorporarse a los ordenamientos jurídicos nacionales;

- f) La Unión Europea debería elaborar una nueva ley europea de patentes que prohibiera la protección mediante patentes de los organismos vivos y sus genes;
- g) Habría que volver a negociar sin demora la Directiva de la Unión Europea.

E. Asociación Internacional de Escritores y Directores de Obras*

1. La Asociación Internacional de Escritores y Directores de Obras planteó en su respuesta diversas cuestiones. En primer lugar, señaló que los intereses morales de los autores, mencionados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también se mencionan en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, cuyo párrafo 1 dice lo siguiente: "Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación". No obstante, la Asociación señala que la fuerza de la protección de los derechos morales de los autores varía radicalmente según los Estados.
2. La Asociación señala asimismo las diferencias de planteamiento entre la protección del derecho de autor en muchos países de tradición jurídica romanista y la protección del "copyright", en los países del common law. El "copyright" no versa sobre los intereses de los autores, sino sobre la protección de las obras. Al ser la obra el objeto de la protección, ésta sólo puede garantizarse si la obra ha sido fijada de algún modo. Por consiguiente, con la aparición de Internet, la doctrina del "copyright" se encuentra en un callejón sin salida a causa de la dificultad de fijar las obras en la realidad virtual. La Asociación señala asimismo que el sistema de "copyright" es complejo y costoso, y a veces ineficiente. En resumen, la protección del "copyright" hace caso omiso de su fundamento mismo, es decir, la propia creación, refuerza considerablemente los derechos de los productores frente a los de los autores y confiere al productor las mismas prerrogativas que a un autor con respecto a los usuarios. El sistema continental del derecho de autor, por el contrario, proporciona al creador de obras audiovisuales un grado de control que es necesario para garantizar la libre circulación de la obra.
3. La utilidad económica del "copyright" es idéntica a la del derecho de autor, pero mientras que éste se basa en el concepto del respeto a la creación, el "copyright", que es una ficción jurídica, considera al productor o la empresa de producción como el único autor. La Asociación se pregunta por qué el "copyright", que niega el vínculo entre el autor y la obra, debería favorecer más a la música o la industria cinematográfica que el derecho de autor (que no niega ese vínculo fundamental).
4. Los derechos morales, como los incluidos en el sistema continental de protección del derecho de autor, contribuyen a la salvaguardia del patrimonio cultural. Con la desaparición de muchas sociedades de producción, son a menudo los autores quienes velan por la preservación de las películas y otras obras de creación. También el público tiene interés en que no se menoscaben ni destruyan las obras artísticas. Existe asimismo la cuestión de la libertad de expresión. Los dos derechos son complementarios y deberían ser protegidos con la misma

* Original francés.

fuerza. Los derechos morales deberían figurar en todos los sistemas de propiedad intelectual y ser respetados como derechos inalienables.

F. Federación Internacional de Músicos*

La Federación Internacional de Músicos señala en su respuesta que la relación entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos humanos tiene una importancia esencial, especialmente habida cuenta de la aparición de la nueva tecnología audiovisual en una época de globalización. La Federación señala cinco cuestiones que deberían examinarse en relación con esta pregunta. En primer lugar, no habría que confundir el derecho de autor con los derechos de propiedad intelectual que protegen las inversiones, como los derechos de los productores, las patentes sobre medicamentos, las marcas de fábrica o de comercio, etc. En segundo lugar, se ha producido una gran concentración de capital y alianzas comerciales (AOL-Warner, Vivendi-Universal-Canal Plus, Napster-Bertelsman, etc.) que aplican estrategias especialmente agresivas con respecto a sus derechos de propiedad intelectual. En tercer lugar, quienes defienden el derecho de acceso a la información para lograr excepciones a los derechos de propiedad intelectual favorecen, directa o indirectamente, los intereses de los nuevos medios de comunicación (servidores de Internet, compañías de televisión, etc.), aprovechando la confusión entre información y creaciones protegidas. En cuarto lugar, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos está siendo constantemente violado tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados en lo que se refiere a los artistas intérpretes o ejecutantes. En particular, la Federación señala a la atención que la última Conferencia Diplomática de la OMPI, de diciembre de 2000, no consiguió aprobar un instrumento internacional por el que se establecieran normas internacionales de protección para esos artistas en la esfera del audiovisual.

G. Unión Internacional de Editores

1. La Asociación Internacional de Editores pone respetuosamente en tela de juicio las supuestas contradicciones reales o potenciales entre la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y el disfrute de otros derechos humanos, económicos, sociales y culturales, como se indica en la resolución 2000/7. En particular, la Asociación pone en tela de juicio la existencia de tales contradicciones en relación con la protección del derecho de autor ("copyright").
2. El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora esencialmente el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Tanto el Convenio de Berna como el Acuerdo sobre los ADPIC establecen un equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y otros derechos humanos. De resultados de ello, ese equilibrio figura ya en gran medida incorporado a las leyes nacionales sobre el derecho de autor ("copyright") y puede incorporarse a las leyes de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.
3. En consecuencia, la Asociación Internacional de Editores hace las recomendaciones siguientes. Respetuosamente insta al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, los Relatores Especiales sobre la globalización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos, el Alto Comisionado de las

* Original francés.

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otras organizaciones gubernamentales internacionales y a sus Estados miembros a:

- a) Que otorguen un reconocimiento más amplio al equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y otros derechos humanos ya enunciados en los tratados internacionales, en particular el artículo 9 del Convenio de Berna, el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 10 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor;
- b) Que tomen nota de las diferencias entre la relación de los derechos de propiedad industrial y otros derechos humanos, por una parte, y la relación entre el derecho de autor ("copyright") y otros derechos humanos, por otra;
- c) Que adopten las disposiciones apropiadas para la pronta y efectiva aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, en especial en lo que se refiere al establecimiento de normas internacionales para la protección y observancia del derecho de autor ("copyright"), y para prevenir las medidas que impidan o retrasen dicha aplicación;
- d) Que promuevan los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional para completar las políticas económicas y sociales en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura.

H. Instituto Max Planck

1. El Instituto Max Planck señaló que la resolución 2000/7 daba la impresión de que había contradicción entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos humanos. En particular, el texto del párrafo 11 parecía dar a entender que los derechos de propiedad intelectual en sí no eran derechos humanos; sin embargo, el Instituto Max Planck estima que los tipos principales de derecho de propiedad intelectual, por lo menos, son derechos humanos.

2. La relación entre los derechos de propiedad intelectual y otros derechos humanos es más bien una relación de equilibrio que una relación de conflicto. Los diferentes derechos humanos se completan recíprocamente, como debe ser. A este respecto, parece indispensable hacer las observaciones siguientes: los derechos de propiedad intelectual se han caracterizado siempre por la búsqueda del equilibrio adecuado entre los derechos de autores e inventores y el interés público; por ejemplo, en la esfera del derecho de autor se limitan los derechos exclusivos en favor del interés público, y la operación consistente en encontrar el equilibrio adecuado mediante la determinación de los derechos exclusivos y sus excepciones ha formado parte de todas las leyes sobre el derecho de autor desde el principio. Lo mismo cabe decir de la fijación de la duración de la protección, que es limitada, frente a la duración de los derechos de propiedad sobre las cosas materiales. Además, no todas las actividades de creación están protegidas por el derecho de autor; quedan exentas, en especial, las ideas, los métodos, el estilo o la mera información o noticias del día.

3. Otros aspectos de la complementariedad entre los derechos de propiedad intelectual y otros derechos humanos que no debe ser olvidada es que los propios derechos exclusivos de autores e inventores han sido justificados incluso desde el punto de vista del interés público, como se

desprende de la Constitución de 1787 de los Estados Unidos según la cual se fomentará el progreso de la ciencia y las artes útiles "asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos". En los países de tradición jurídica romanista, los derechos de los autores e inventores han sido fundamentados en los principios del derecho natural, a partir de la idea de que los resultados de su labor son el patrimonio natural de autores e inventores.

4. Otro aspecto que parece esencial para evaluar la relación entre la propiedad intelectual y otros derechos humanos es que sólo el reconocimiento de la exclusividad de los derechos del autor permiten a éste ganarse la vida mediante la explotación de sus creaciones. Del mismo modo, en la esfera de las patentes, sólo el reconocimiento de los derechos exclusivos del inventor permite a éste invertir en investigación sobre, por ejemplo, nuevos productos farmacéuticos o nuevos procedimientos médicos; si no existiera la posibilidad de amortizar el elevado costo de esa investigación, nadie trataría de encontrar nuevos fármacos u otros productos que después beneficiarán a todos. En otras palabras, sin derechos exclusivos, no habría ningún progreso en el campo de la medicina ni en otras esferas de invención, o por lo menos no lo habría con la misma rapidez y calidad. Por consiguiente, la propiedad intelectual promueve y hace posible el progreso de la ciencia en beneficio de todos.

5. Habría que aclarar los párrafos 5 y 6 de la resolución 2000/7 en la medida en que se refieren a la función social de la propiedad intelectual, entre otras cosas teniendo en cuenta que los autores necesitan que sus derechos estén legalmente protegidos, como se reconoce, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisamente porque su posición social suele ser bastante baja ya y dependen de la posibilidad de beneficiarse de la explotación de su obra. Después de la Conferencia de Revisión del Convenio de Berna, celebrada en Estocolmo en 1967, la mayoría de los parlamentos de los países interesados se negaron a ratificar el anexo que había sido negociado y que establecía excepciones de gran alcance al derecho de autor en favor de la explotación de las obras de los países en desarrollo. Una de las razones principales de ese rechazo fue que los parlamentos no encontraron justificado hacer excepciones en favor de los países en desarrollo. Integrar las obligaciones y principios de derechos humanos que protegen la función social de la propiedad intelectual en disposiciones, prácticas etc., significa también que la protección del derecho de autor cumple una función social, como se ha indicado anteriormente. La situación de los inventores es comparable.
